

Al Presidente de Colombia
A los Gobiernos de la Unión Europea y los países europeos
A la Opinión Pública

Bruselas, 11 de febrero 2015

Asunto: Incremento de amenazas y atentados en Colombia

Al iniciar este año 2015 vemos con optimismo la posibilidad de que se llegue a la firma de un acuerdo que permita el fin del conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Después de más de 50 años de guerra pensamos que esta es una posibilidad que no se debe dejar perder. Asimismo, esperamos que también se inicien próximamente conversaciones y se alcance un acuerdo con la guerrilla del ELN.

Al mismo tiempo vemos con gran preocupación como en los últimos meses se han incrementado de manera significativa las amenazas y los atentados contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes de los movimientos sociales, de partidos de izquierda, personas que quieren recuperar sus tierras y periodistas independientes, por parte de grupos paramilitares como los Urabeños, los Rastrojos, Águilas Negras o Autodefensas Gaitanistas de Colombia entre otros.

El último informe de Front Line Defenders, sobre afectaciones a defensoras y defensores de Derechos Humanos, señaló que Colombia fue el país donde más asesinatos contra éstos se presentaron en el 2014, con un total de 42 personas asesinadas. Solamente durante el primer mes de 2015 decenas de personas han vuelto a ser amenazadas, se han producido dos atentados contra sindicalistas y por lo menos dos líderes sociales han sido asesinados. Estos son solo algunos de los ejemplos:

El 11 de enero el grupo paramilitar Bloque Norte Costa Atlántica Águilas Negras declaraba objetivos militares a 40 personas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y reclamantes de tierras y citaba además varias organizaciones de derechos humanos. Estas personas han participado en el proceso de restitución de tierras y en cuestiones relativas al proceso de paz en los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico.

El 21 de enero circuló por las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Bogotá, un panfleto con una amenaza de muerte firmada por los Bloques Conjunto del Atlántico y Magdalena del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el panfleto se amenazaba y se tachaba de guerrilleros a decenas de personas vinculadas al proceso de restitución de tierras: funcionarios del Estado, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas.

También durante este mes de enero 13 dirigentes de la Unión Sindical Obrera -USO- fueron amenazados de muerte en diferentes regiones del país. Dos de ellos sufrieron atentados con armas de fuego, Oscar García en Arauca, el 6 de enero y Rodolfo Valentino Prada en Cartagena el 23 de enero.

El líder social Carlos Pedraza fue desaparecido y posteriormente asesinado con un tiro en la cabeza en una zona de reconocida influencia paramilitar. El día 21 de enero su cuerpo fue encontrado sin vida en el municipio de Gachancipa, en el Departamento de Cundinamarca.

El 30 de enero fue asesinado en Yondó, Antioquia, el campesino Jáinton Andrés Ávila, líder comunitario de la Zona de Reserva Campesina del Río Valle Cimitara.

Los últimos días de enero un grupo autodenominado Colombianos por la Pacificación amenazó de muerte a un reconocido grupo de líderes sociales y de opinión comprometidos con el proceso de paz en Colombia.

Estos hechos ponen en entredicho que las limitadas medidas de seguridad que ofrece el gobierno frente a estas amenazas sean suficientes ni adecuadas. En cambio, evidencian que no existen garantías para la necesaria labor de exigencia de los derechos humanos.

Estas situaciones confirman la existencia de importantes fuerzas en contra de la paz que quieren mantener una situación de conflicto permanente para beneficiar sus intereses. Si estos grupos criminales, ya sean llamados paramilitares o bacrim, no son reducidos, desmantelados y llevados ante la justicia, así como los miembros de la fuerza pública que mantienen nexos con estos grupos, tenemos la seguridad de que serán la semilla que volverá a alimentar el conflicto.

Solo una Paz con garantías de respeto a los Derechos Humanos es una Paz con garantías de continuidad. Es imprescindible que el Estado colombiano intervenga de manera decidida y desmantele a los grupos paramilitares. No debe dejarse lugar a la ambigüedad ni dar motivos para pensar que el Estado o alguna de sus instituciones permiten o colaboran, de la forma que sea, en facilitar el trabajo o encubrir las actividades criminales de esos grupos.

Las máximas autoridades de Colombia, así como todos los representantes políticos, deben hacer declaraciones contundentes en contra de esos grupos criminales y emprender todas las medidas posibles para su rápido desmantelamiento.

Asimismo, la comunidad internacional amiga de Colombia y de su proceso de paz, ya sean Gobiernos, representantes de la sociedad civil, iglesias u organizaciones internacionales, deben pronunciarse de forma clara y contundente contra las acciones de esos grupos y a favor de la actividad legítima y democrática de las diferentes fuerzas políticas y movimientos sociales.

Especialmente la Unión Europea y los países europeos deben seguir dando un apoyo explícito al proceso de paz y condenar de forma clara todos los atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, ya que esos atentados hacen peligrar el proceso.

Esperamos que estén a la altura de las circunstancias y faciliten con sus esfuerzos el alcance de una paz tan necesaria para el futuro de Colombia y de su ciudadanía. No podemos permitirnos perder esta oportunidad soñada durante tantos años.

Entidades firmantes:

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture – ACAT (France)

ask! Grupo de Trabajo Suiza Colombia/Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien (Suiza)

Asociación de Solidaridad con Colombia Katío (ASOC-Katío) (Colombia)

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR (Colombia)

Colectivo Maloka-Colombia (España)

CoMundo (Suiza)

Corporación Con-Vivamos (Colombia)

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE (Colombia)

DKA Austria

El Consejo de la Comunidad Santo Tomás de Aquino (España)

FOS-socialistische solidariteit vzw (Bélgica)

Justicia por Colombia (España)

Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (España)

Oficina Internacional Derechos Humanos Acción Colombia – Oidhaco; red de 36 organizaciones europeas (Internacional)

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia – PEPAZ (Estado Español), está integrada por unas 50 organizaciones del Estado Español agrupadas en las siguientes entidades:

- Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia,
- Justicia por Colombia,
- Kolektiba Colombia,
- Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia,
- Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia,
- Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia,
- Plataforma Asturiana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia.

Soldepaz Pachakuti (España)

Somos Taller Abierto, Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Colombia)

Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (España) formada por:

- Ajuntament de Lleida
- Associació Catalana per la Pau
- Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
- Cooperació
- Entrepobles
- LaFede.cat
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
- Fundació Desenvolupament Comunitari
- Fundació Pagesos Solidaris
- Fundació Pau i Solidaritat – CCOO
- FundiPau
- Intersindical – CSC
- Justícia i Pau
- Lliga dels Drets dels Pobles
- Moviment per la Pau – MPDL
- Oxfam Intermón
- Sindicalistes Solidaris - UGT

Terre des hommes Schweiz (Suiza)

Terre des Hommes Suisse (Suiza)